



**RESOLUCIÓN No. CSJBOR22-715**  
26 de mayo de 2022

*“Por medio de la cual se decide una solicitud de vigilancia judicial administrativa”*

**Vigilancia judicial administrativa No.:** 13001-11-01-001-2022-00361-00

**Solicitante:** Eny Díaz Niz

**Despacho:** Juzgado 4º Administrativo de Cartagena

**Funcionario judicial:** Maritza Cantillo Puche

**Clase de proceso:** Ejecutivo

**Número de radicación del proceso:** 13001310300420080013400

**Magistrada ponente:** Patricia Rocío Ceballos Rodríguez

**Fecha de sesión:** 25 de mayo del 2022

## I. ANTECEDENTES

### 1. Solicitud de vigilancia judicial administrativa

La señora Eny Díaz Niz, en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo que cursa en el juzgado 4º Administrativo de Cartagena, solicitó vigilancia judicial, dado que según lo afirma, desde el 16 de marzo del 2022, se presentó declaratoria de ilegalidad sin que hasta la fecha se haya dado trámite.

### 2. Trámite de la vigilancia judicial administrativa

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3º del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante auto CSJBOAVJ22-387 del 16 de mayo del 2022, se dispuso requerir a la doctora Maritza Cantillo Puche, Jueza 4ª Administrativa de Cartagena y a la secretaria de esa agencia judicial, para que suministraran información detallada del proceso referenciado, el cual fue notificado mediante mensaje de datos el 23 de mayo del 2022.

### 3. Informe de verificación

Dentro de la oportunidad para ello, la doctora Maritza Cantillo Puche, Jueza 4ª Administrativa de Cartagena, rindió el informe bajo la gravedad de juramento (artículo 5º del Acuerdo PSAA11-8716 de 2019) y afirmó que: i) El 17 de junio de 2019 se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte demandante y en auto del 24 de marzo de los cursantes se procedió igualmente a modificar la re-liquidación del crédito allegada por la ejecutante; ii) en proveídos del 17 de junio y 8 de noviembre de 2019 se accede a la solicitud de embargo presentada y finalmente, el 15 de febrero es proferida la medida cautelar que constituye la génesis de la presente solicitud de vigilancia, la cual decretó el embargo y retención de la tercera parte de los ingresos brutos que por la prestación de los servicios de salud le adeuden a la ESE demandada la NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. – NUEVA EPS; iii) el 16 de marzo del 2022, se recibieron memoriales, uno suscrito por el apoderado judicial de la parte ejecutada en el que solicitó que se decretara la ilegalidad del auto en mención, argumentando la inembargabilidad de los recursos embargados como quiera que son recursos de la salud. Y el otro, suscrito por la gerente de la entidad ejecutada dando respuesta al oficio que comunicó la medida, manifestando que en virtud de lo señalado en el artículo 594, del C.G.P., decidieron no

aplicar la medida decretada en atención al concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación, mediante la directiva N° 22 de abril de 2010, en la que se advierte el carácter de inembargables de los recursos destinados al sistema de seguridad social; iv) el 17 de marzo del 2022, la secretaria informó de la respuesta dada por la demandada a la emitida por el despacho; v) en auto del 24 de marzo de 2022, se corrió traslado a la parte ejecutante de la solicitud de ilegalidad efectuada por la ejecutada; quien en fecha 30 de marzo del 2022 (oportunamente) procedió a descorrer dicho traslado, lo cual fue informado por el secretario el día 31 de marzo. El 18 de abril y el 2 de mayo, la ejecutante presentó una adición a su pronunciamiento respecto de la solicitud de ilegalidad. Y el 10 de mayo solicita se rechace tal solicitud de ilegalidad. Lo cual es puesto igualmente en conocimiento por la secretaria; vi) el 12 de mayo de 2022 se dispuso oficiar a la ADRESS, poniéndole en conocimiento la medida decretada por el despacho a fin de que se sirvieran aclarar la naturaleza de los dineros que gira a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE MORALES.

## CONSIDERACIONES

### 2.1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por la doctora Eny Díaz Niz, dentro del proceso de la referencia, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la solicitud se dirige en contra de uno de los despachos judiciales de esta circunscripción territorial.

### 2.2. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe “para que la justicia se administre oportuna y eficazmente” y que “es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: i) cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; ii) si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y iii) si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: “*Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones*”. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las

pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

### **2.3. Planteamiento del problema a resolver**

Conforme a la solicitud de vigilancia judicial administrativa y lo informado por las servidoras judiciales requeridas, corresponde a esta corporación determinar si han existido actuaciones y omisiones en el curso de la actuación dentro del proceso de la referencia, en específico sobre la mora judicial alegada, que involucren un actuar u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia.

En caso de estimarse lo anterior, atendiendo a que el solicitante enuncia circunstancias de mora judicial, se determinará la procedencia de la imposición de correctivos administrativos o compulsas de copias a la jurisdicción disciplinaria contra el servidor judicial determinado.

### **2.4. El derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas**

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8º, prevé dentro de las garantías procesales, el derecho de toda persona *“a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (...)”*.

Por su parte, la Constitución Política en sus artículos 29 y 229 consagran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, respectivamente, los cuales comprenden las prerrogativas que se enuncian a continuación: i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial, ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna, y iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

La anterior consagración implica el deber de todas las autoridades públicas de observar de manera diligente los términos y adelantar de manera oportuna los trámites judiciales de que conoce, en tanto su inobservancia y la dilación injustificada *“(...) pueden conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración en general, y a la administración de justicia en particular”*, amén de resultar lejana la efectividad de una justicia material en el caso concreto.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado también que *“el incumplimiento de los plazos judiciales tiene un carácter excepcional, pues la regla general, contenida en el artículo 228 superior, es la obligatoriedad de los términos procesales”*, en ese sentido, se admite en casos excepcionales que el incumplimiento de los términos procesales no le es directamente atribuible al funcionario judicial en tanto *“la mora, la congestión y el atraso judiciales son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la administración de justicia en Colombia”*.

En ese orden, con relación a la mora judicial, mediante sentencia T-052 de 2018, la Corte Constitucional precisó:

*“La mora judicial es un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.*

*(...)*

*Dentro del deber de garantizar el goce efectivo del derecho, se encuentra incluida la solución célere de los asuntos adelantados ante funcionarios judiciales, por ello, esta Corte ha determinado la prohibición de dilaciones injustificadas en la administración de justicia (...).*

*Al respecto, en Sentencia T-230 de 2013, reiterada en la T-186 de 2017, entre otras, la Sala Tercera de Revisión expuso las circunstancias en las cuales se configura la mora judicial injustificada: “(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial”.*

*(...)*

*En el mismo fallo, se enunciaron las circunstancias en las que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos judiciales señalados por la jurisprudencia constitucional, resumidos de la siguiente manera: “(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley.”*

También respecto a este asunto, el Consejo de Estado ha expresado: *“(...) no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que esta debe ser injustificada, debe estar probada la negligencia de la autoridad judicial demandada y que sea probable la existencia de un perjuicio irremediable. Si por el contrario, la actuación de los falladores de instancia es célere y diligente, pero por circunstancias imprevisibles no es posible dar cumplimiento a los términos judiciales, tampoco se configura la alegada mora judicial”.*

Quiere decir lo anterior, que para determinar si se está o no frente a una dilación justificada es necesario realizar un análisis valorativo y la comprobación de las circunstancias en el caso concreto, *“juicio ciertamente complejo en el que “deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia, ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, iii) la complejidad del caso sometido a su conocimiento y iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal”.*

Por tanto, la omisión o dilación en el cumplimiento de los términos procesales en cuanto su relevancia constitucional está ligada a la relación intrínseca entre la carga funcional y el cumplimiento de los deberes a su cargo.

En conclusión, puede afirmarse válidamente, que de conformidad con la jurisprudencia sentada por estas corporaciones, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar

alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, y, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debido a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos.

A su turno, cuando se presenta un incumplimiento de los términos procesales, la prosperidad de las causales eximentes de sanción administrativa corresponde examinarlas en cada caso concreto. El incumplimiento de los términos se entiende justificado *“(i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constatan problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o decongestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución del caso en el plazo previsto en la ley”*.

Lo descrito en precedencia, fue tenido en cuenta en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, cuando en el artículo 7º dijo:

*“(...) la respectiva Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate.*

*Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas”*.

Implica lo anterior, que en el trámite de una vigilancia judicial administrativa cada caso concreto debe analizarse de manera particular y observarse las circunstancias propias del despacho vigilado así como la gestión del servidor judicial, entre esos aspectos, la carga efectiva, los ingresos efectivos y la productividad entre otros, que permitan concluir, en el evento de no acatarse el término perentorio e improrrogable, la existencia de razones no sólo que la expliquen sino que la justifiquen, pues no es admisible que frente a circunstancias objetivas de dificultad en la gestión judicial se exija el cumplimiento inexorable de los términos, pues si bien su incumplimiento es sancionable, tal hecho *“se exculpa cuando se presenta una causa extraña o cuando se desborda la capacidad física del funcionario con la cantidad de trabajo que le corresponde en ese determinado momento (...)”*.

## **2.5. Caso concreto**

En el sub examine, la doctora Eny Díaz Niz, en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo que cursa en el juzgado 4º Administrativo de Cartagena, solicitó vigilancia judicial, dado que según lo afirma, desde el 16 de marzo del 2022, se presentó declaratoria de ilegalidad sin que hasta la fecha se haya dado trámite

Frente a las alegaciones de la peticionaria, la doctora Maritza Cantillo Puche, Jueza 4ª Administrativa de Cartagena, rindió el informe bajo la gravedad de juramento (artículo 5º del Acuerdo PSAA11-8716 de 2019) y afirmó que: i) El 17 de junio de 2019 se modificó la liquidación del crédito presentada por la parte demandante y en auto del 24 de marzo de los cursantes se procedió igualmente a modificar la re- liquidación del crédito allegada por

la ejecutante; ii) en proveídos del 17 de junio y 8 de noviembre de 2019 se accede a la solicitud de embargo presentada y finalmente, el 15 de febrero del 2022 es proferida la medida cautelar que constituye la génesis de la presente solicitud de vigilancia, la cual decretó el embargo y retención de la tercera parte de los ingresos brutos que por la prestación de los servicios de salud le adeuden a la ESE demandada la NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. – NUEVA EPS; iii) el 16 de marzo del 2022, se recibieron memoriales, uno suscrito por el apoderado judicial de la parte ejecutada en el que solicitó que se decretara la ilegalidad del auto en mención, argumentando la inembargabilidad de los recursos embargados como quiera que son recursos de la salud. Y el otro, suscrito por la gerente de la entidad ejecutada dando respuesta al oficio que comunicó la medida, manifestando que en virtud de lo señalado en el artículo 594, del C.G.P., decidieron no aplicar la medida decretada en atención al concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación, mediante la directiva N° 22 de abril de 2010, en la que se advierte el carácter de inembargables de los recursos destinados al sistema de seguridad social; iv) el 17 de marzo del 2022, la secretaria informó de la respuesta dada por la demandada a la emitida por el despacho; v) en auto del 24 de marzo de 2022, se corrió traslado a la parte ejecutante de la solicitud de ilegalidad efectuada por la ejecutada; quien en fecha 30 de marzo del 2022 (oportunamente) procedió a descorrer dicho traslado, lo cual fue informado por el secretario el día 31 de marzo. el 2 de mayo, la ejecutante presentó una adición a su pronunciamiento respecto de la solicitud de ilegalidad. Y el 10 de mayo solicita se rechace tal solicitud de ilegalidad. Lo cual es puesto igualmente en conocimiento por la secretaria; vi) el 12 de mayo de 2022 se dispuso oficiara la ADRESS, poniéndole en conocimiento la medida decretada por el despacho a fin de que se sirvieran aclarar la naturaleza de los dineros que gira a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE MORALES.

Teniendo en cuenta la solicitud de vigilancia judicial administrativa, el informe rendido por la funcionaria judicial y los documentos aportados, se tiene que dentro del proceso de la referencia se surtieron las siguientes actuaciones:

No.	Actuación	Fecha
1	Auto decreta medida de embargo, decretando recursos de la demandada NUEVA EPS	15/02/2022
2	Memorial solicita la ilegalidad del auto de fecha 15 de febrero del 2022	16/03/2022
3	Memorial del gerente de la demandada, informando no dio aplicación de la medida, por considerar los recursos de la salud son de naturaleza inembargables.	16/03/2022
4	Pasa al despacho los memoriales	17/03/2022
5	Auto ordena correr traslado a las partes de la solicitud de ilegalidad del auto de fecha 15 de febrero del 2022	24/03/2022
6	La parte demandante se pronuncia sobre la solicitud	30/03/2022
7	Se descorre el traslado y paso al despacho	31/03/2022
8	Memorial solicita presenta adición al pronunciamiento	02/05/2022
9	Memorial solicita se rechace la solicitud de ilegalidad	10/05/2022
10	Auto ordenó oficiar a la ADRESS, poniéndole en conocimiento la medida decretada por el despacho a fin de que se sirvieran aclarar la naturaleza de los dineros que gira a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE MORALES.	12/05/2022

11	Comunicación del requerimiento de la vigilancia administrativa	23/05/2022

De las actuaciones relacionadas en precedencia que, mediante auto de 12 de mayo del 2022, se ordenó oficiar a la ADRESS, poniéndole en conocimiento la medida decretada por el despacho a fin de que se sirvieran aclarar la naturaleza de los dineros que gira a la ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE MORALES, providencia que fue proferida antes del requerimiento realizado por esta seccional el 23 de mayo del 2022, por lo que no se avizoran circunstancias constitutivas de mora actual.

En este punto debe aclarar esta corporación, que si bien a la fecha no se ha aceptado o negado la solicitud ilegalidad del auto de fecha 15 de febrero del 2022, se advierte que la funcionaria judicial en virtud del principio de autonomía, consideró que previo a resolver de fondo la solicitud, era pertinente y necesario oficiar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, a fin de tener mayor claridad respecto de la naturaleza u origen de los recursos objetos del embargo, tal como lo dejó sentado en la parte considerativa del auto del 12 de mayo del 2022, encontrándose a la espera de la respuesta de la entidad requerida, y sin que dentro del plenario existan prueba de solicitudes o requerimientos adicionales, a los resueltos por el despacho judicial.

Por tanto, en el presente caso no es posible alegar la existencia de mora judicial presente, teniendo en cuenta que lo pretendido por la quejosa fue satisfecho con anterioridad al requerimiento efectuado por el despacho ponente, lo que impide seguir adelante con este trámite, pues de los artículos 1° y 6° del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, *“por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996”*, se infiere razonablemente que la finalidad de esta actuación administrativa es procurar por la eficiente prestación del servicio de administración de justicia para sucesos de mora presentes.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

### 3. RESUELVE

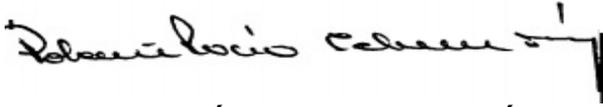
**PRIMERO:** Archivar la vigilancia judicial administrativa promovida por Eny Díaz Niz, en calidad de apoderada de la parte demandante dentro del proceso ejecutivo identificado con radicado 13001310300420080013400 que cursa en el juzgado 4° Administrativo de Cartagena, por las razones esbozadas en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Comunicar la presente resolución a la solicitante, doctora Maritza Cantillo Puche, Jueza 4ª Administrativa de Cartagena y a la secretaria de esta agencia judicial.

**TERCERO:** Contra esta decisión solo procede recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación o comunicación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, art. 74 y siguientes.

Resolución Hoja No. 8  
Resolución No. CSJBOR22-715  
26 de mayo de 2022

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**PATRICIA ROCÍO CEBALLOS RODRÍGUEZ**  
Presidenta  
MP PRCR/YPBA